

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 16° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-5960-2021
CARATULADO	: DONOSO/FISCO / CONSEJO DE DEFENSA DEL
ESTADO	

Santiago, veintidós de Diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos.

Con fecha con fecha 13 de julio de 2021, comparece don Boris Paredes Bustos, en representación de doña **María Cristina Donoso Contreras**, pensionada, domiciliada en Pasaje Los Pirineos N°3295, comuna de Maipú, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios contra del **Fisco de Chile**, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, ambos domiciliados en calle Agustinas 1225, piso 4°, comuna de Santiago.

Con fecha 30 de agosto de 2021, el demandado contestó la demanda.

Con fecha 02 de septiembre de 2021, el demandante evacuó la réplica.

Con fecha 10 de septiembre de 2021, el demandado evacuó la réplica

Con fecha 21 de septiembre de 2021, se recibió la causa a prueba.

Con fecha 17 de noviembre de 2021, se citó a las partes a oír sentencia.

Considerando

Primero. Que, comparece don Boris Paredes Bustos, en representación de doña María Cristina Donoso Contreras, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios contra del Fisco de Chile,



Foja: 1

representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, todos ya individualizados.

Funda su demanda en el hecho que doña María Donoso fue detenida ilegalmente por militares, en una primera ocasión, el día 19 de diciembre de 1973 a las 14:00 horas aproximadamente, en su domicilio, ubicado en aquel entonces en el campamento “Casa o Muerte” (Américo Vespucio con Avenida Coronel), comuna de La Granja. Los militares la buscaban tanto a ella, militante del MIR, como a su pareja. Debió dejar a su hijo de un mes y medio de edad con su amiga Nora Silva, luego fue trasladada hasta el Regimiento de Infantería de San Bernardo. Durante el viaje, sus captores le dieron golpes de pies y manos, la insultaron reiteradamente y abusaron sexualmente de ella, manoseando distintas partes de su cuerpo. Antes de llegar al regimiento, le vendaron los ojos y le dijeron que si ella no entregaba información, la matarían y que nunca más vería a su hijo. Estuvo incomunicada por seis días, siendo constantemente amenazada por militares con que la iban a violar, la golpeaban, la manoseaban y se burlaban por ella por horas. El día 25 de diciembre de 1973 fue puesta en libertad.

Agrega que en una segunda oportunidad fue detenida ilegalmente, sin orden judicial, siendo aproximadamente las 21:00 horas del día 01 de enero de 1974, mientras doña María Cristina se encontraba en la casa de su padre en la comuna de Maipú, por militares, quienes le exigían la entrega de armas. Fue trasladada junto a su hijo menor hasta la medialuna de Maipú, semidesnuda, lugar donde quedó incomunicada. En esas condiciones debía amamantar a su hijo pequeño. A la semana de estar recluida en ese lugar, le quitaron a su hijo y le dijeron que lo llevarían de vuelta a la casa de sus padres. Sus captores ejercieron torturas sicológicas y la golpearon en la cabeza, lo que la mantuvo inconsciente por varios días, sin contar con ropa limpia ni medios para higiene femenina, con los pechos inflamados, quedando en libertad, finalmente, el día 20 de enero de 1974.

Añade que en una tercera oportunidad, siendo aproximadamente las 09:00 horas del día 24 de enero de 1974, fue detenida mientras se encontraba en la casa de un familiar del padre de su hijo menor, en la Población Violeta Parra. La detención fue practicada nuevamente por militares, quienes la trasladaron hasta el cuartel de la Policía de



Foja: 1

Investigaciones ubicado en calle General Mackenna, lugar donde quedó incomunicada. Después de permanecer dos días en ese lugar, supuestamente para verificar su identidad, sufriendo torturas tanto físicas como psicológicas y vejaciones, doña María Cristina fue trasladada con la vista vendada hasta el regimiento de infantería de Puente Alto. En este lugar, la dejaron en libertad, pero le ordenaron que no saliera de su domicilio hasta que abandonara el país, solamente podía salir de su casa para cumplir con la obligación de firmar en el regimiento todos los días sábado.

Indica que posteriormente salió en calidad de refugiada política hacia Mendoza, Argentina. Sólo 8 meses después pudo reunirse con su hijo menor. Permaneció en ese país por 2 años y luego viajó en calidad de exiliada a Canadá, país en el que vivió por treinta años, dejando en Chile a sus dos hijos mayores, de 8 y 4 años de edad, respectivamente, a quienes sólo pudo volver a ver tras doce años en el extranjero. Producto de todos esos sucesos resultó con graves problemas a nivel psicológico, padece estrés postraumático crónico, lo que se vio incrementado después del estallido social ocurrido el 18 de octubre de 2019.

Manifiesta que producto del secuestro, torturas, encarcelamiento, persecución política y exilio sufrió un perjuicio síquico, físico y moral que permanece aun cuando han transcurrido 45 años desde esos hechos, daño moral por el que demanda la suma de \$200.000.000, con reajustes e intereses desde la notificación de la demanda o al monto que estime el juez.

Fundamenta en cuanto al derecho, que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestros y tortura durante la dictadura militar en instrumentos jurídicos, específicamente en el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y en el Informe sobre Prisión Política y Tortura, conocido como “Informe Valech”. En este último, la demandante es reconocida como víctima de prisión política y tortura. Explica que el Estado debe responder por los perjuicios causados a la luz de lo dispuesto en los artículos 4, 10 N° 1 y 10 N° 9 de la Constitución de 1925, fuente directa de los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política vigente, artículos 4 y 42 de la ley 18.575, existiendo en la misma línea doctrina y jurisprudencia. La acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado por actos u



«RIT»

Foja: 1

omisiones por las cuales se ha producido daño a las personas, según la doctrina unánime de los autores iuspublicistas, es imprescriptible, sin que quepa aplicación a las normas del título XXXV del Código Civil. Por ello, en el presente caso la acción no se encuentra prescrita.

Arguye que los hechos sufridos por la demandante constituyen violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y por ello la responsabilidad del Estado debe determinarse de conformidad con los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran como normas de ius cogens y las normas generales del derecho internacional. Invoca el artículo 27 de la Convención de Viena sobre derecho internacional de los tratados; artículo 63.1 de la Convención americana de derechos humanos, que establece el derecho a la reparación de las víctimas de tortura; el artículo 1° de la Convención contra la tortura, que define el término "tortura", artículo 14 que obliga al Estado a velar por la indemnización justa y adecuada a la víctima; artículo 9° de la Convención interamericana para prevenir la tortura, en que los Estados se comprometen a incorporar normas para garantizar una compensación adecuada a las víctimas. Cita la Resolución 60/147 de la Asamblea de las Naciones Unidas aprobada el 16 de diciembre de 2005, principios 11, 15, 16, 19 a 23. La procedencia de indemnización del daño moral la funda en el artículo 2329 del Código Civil.

Concluye que concurren todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar: 1.- Existencia de daño moral producto de la detención ilegal y torturas; 2.- La acción emanó de órganos del Estado, ya que agentes del Estado infligieron las torturas, específicamente funcionarios del Ejército de Chile y de la Policía de Investigaciones y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal; 3.- Nexo causal. El daño a la víctima emana, justamente, de la perpetración del delito civil. 4.- No existen causales de justificación.

Previas citas legales, solicita tener por entablada demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribondo Poduje, ya individualizados, acogerla a tramitación y, en definitiva, aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por



«RIT»

Foja: 1

las torturas de que fue objeto, la suma de \$200.000.000.-, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que SS. estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con expresa condena en costas.

Segundo. Que, comparece la abogada Ruth Israel López, en representación del Fisco de Chile, al contestar la demanda principal, solicita el rechazo de dicha acción en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone a continuación.

Opone en primer lugar la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizado el demandante.

Reparaciones mediante transferencia directa de dinero y pensiones.

En tal sentido manifiesta que las indemnizaciones que el demandante solicita se desenvuelven en el marco de las infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. En efecto, la Ley Nro. 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, mediante reparaciones mediante transferencias directas de dinero, mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y reparaciones simbólicas, lo que permite que numerosas víctimas obtengan una reparación monetaria. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos, haciéndose referencia en la discusión de dicha ley incluso al objeto indemnizatorio de reparación moral y patrimonial de aquella.

Hace presente que a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-, por concepto de reparaciones de daño moral ocasionado a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Agrega que estas pensiones han sido una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, además de la



«RIT»

Foja: 1

indicada pensión, la Ley 19.123 consagra además transferencias directas de dinero que se han creado con idénticos fines reparatorios.

Reparaciones específicas.

Expresa que el demandante ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes números 19.234 y 19.992 y sus modificaciones.

Indica en primer término que la ley 19.992 (y sus modificaciones) estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, todos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Agrega que así, se estableció para quienes figuraran en dicha nómina una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Consigna adicionalmente, se concedió a los beneficiarios el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Precisa que el PRAIS cuenta con un equipo compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Menciona que también se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, junto con beneficios en vivienda, correspondiente al acceso a subsidios para vivienda.

Reparaciones simbólicas.

Expone que al igual que en todos los demás procesos de Justicia Transicional, parte importante de la reparación por los daños morales



«RIT»

Foja: 1

causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino que precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral. En este sentido refiere una serie de reparaciones de carácter simbólico en las que ha incurrido el Estado (Memorial del Cementerio General, establecimiento del Día del Detenido Desaparecido, construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros).

La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

De lo expresado anteriormente concluye que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera del Estado que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos.

Así las cosas, tanto la indemnización demandada como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones. Cita jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia en apoyo de su posición.

En segundo lugar opone excepción de prescripción extintiva.

En subsidio opone la prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios deducidas en este proceso civil con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código. Solicita que, por encontrarse prescritas éstas, se rechacen las acciones resarcitorias en todas sus partes.



«RIT»

Foja: 1

Esgrime que conforme al relato efectuado por los demandantes, las detenciones, privaciones de libertad y torturas se produjeron en un lapso de tiempo que va entre noviembre de 1974 y octubre de 1975.

Razona expresando que incluso entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 15 de junio de 2018, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, por lo que opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en la norma recién citada.

Señala que en subsidio de la excepción de prescripción recientemente referida, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción indemnizatoria, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Refiere finalmente sobre la alegación de los demandantes en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria de autos, indica que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, no es factible, a su juicio, apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Cita variada jurisprudencia al respecto.

Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria

Que en la especie se han ejercido acciones de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la



«RIT»

Foja: 1

responsabilidad que se persigue, en atención a que las acciones impetradas pertenecen -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

Agrega que en base a normas contenidas en el Derecho Internacional, que no hay norma expresa de derecho internacional de los derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar

En cuanto al daño e indemnización reclamada.

Interpone en subsidio de las defensas y excepciones reproducidas anteriormente, las siguientes alegaciones respecto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Refiere que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino que sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Enfatiza en que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberán ser justificadas íntegramente.

En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los beneficios extrapatrimoniales que los distintos cuerpos legales contemplan, pues su finalidad era precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición



«RIT»

Foja: 1

subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Improcedencia del pago de reajustes e intereses.

Finaliza su contestación señalando que no procede el cobro de reajustes e intereses, en el caso de que la sentencia que se dicte en autos acoja la demanda y establezca esa obligación, solicitando que de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

En razón de lo expuesto previamente, pide tener por contestada la demanda y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Tercero. Que, al evacuar la réplica, la parte demandante, vino a expresar lo siguiente.

En cuanto a los hechos, no han sido discutidos.

En cuanto a la excepción de reparación integral, indica que el hecho de haber obtenido pensiones de reparación con arreglo a la Ley N° 19.123 no es óbice ni inconveniente alguno para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un tribunal de la República, por lo que la excepción de pago opuesta por el Fisco resulta inconciliable con la normativa internacional ya señalada en la demanda, porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no contradice al Derecho Internacional.

Concluye y reitera en atención a lo expresado en el párrafo anterior, que el régimen de pensiones asistenciales invocado por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es dable presumir que se diseñó para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos porque se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado



«RIT»

Foja: 1

voluntariamente, como es el caso de la legislación citada, no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.

En cuanto a la excepción de prescripción expone que la Excm. Corte Suprema ha señalado que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito.

Agrega que en razón de lo reseñado en el párrafo anterior, cualquier intención de diferenciar la acción civil y penal en materia de derechos humanos resulta discriminatoria al otorgar un tratamiento desigual, no permitiendo al ordenamiento jurídico guardar la debida coherencia y unidad que se le reclama.

En cuanto al monto de la indemnización, manifiesta que los montos demandados están totalmente ajustados a la justicia, ya que se trata del daño moral de la mayor entidad, que demostrará oportunamente en el término probatorio, acreditando las consecuencias dañosas de los aciagos hechos narrados para la salud mental de sus mandantes. Agrega que debe ser el tribunal quien determine el monto del daño moral y desde cuando se aplican los reajustes e intereses.

Respecto a los reajustes e intereses, indica que los reajustes e intereses demandados están conforme a derecho, puesto que un tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, razón por la cual tiene que considerar la desvalorización, sin perjuicio de ser el tribunal el soberano para fijar el momento desde el cual se reajusta y devengan intereses los montos fijados como indemnización.



Foja: 1

Cuarto. Que, al evacuar el trámite de duplica la parte demandada reitera los fundamentos de hecho y de derecho de su contestación fiscal, especialmente en cuanto a la excepción de prescripción y la excepción de pago.

Quinto. Que, se recibió la causa a prueba, estableciéndose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que allí se señalaron.

Sexto. Que, en respaldo de sus peticiones, la demandante rindió prueba documental, consistente en:

1.- Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, "Valech 1". Documento de 638 páginas.

2.- Copia autorizada de antecedentes de carpeta de doña María Cristina Donoso Contreras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. 24 páginas. Contiene una ficha de registro llenada a mano que contiene relato de tres detenciones, firmada por María Donoso. Cada hoja tiene un timbre que dice "Instituto nacional de derechos humanos copia fiel del original". Contiene además un certificado emitido por Eduardo Contreras Mella, quien relata que conoce hace años a María Donoso, le consta que fue antigua dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que fue detenida en 3 ocasiones, detallando lugares y fechas de cada una, no explica cómo le consta el detalle de las detenciones. Se lee un certificado de fecha 23 de marzo de 2010, que dice consta en documentos de la Fundación de documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad que MARÍA DONOSO fue detenida por militares en el domicilio de los padres de su ex conviviente en 1974, conducida a un regimiento, y fue dejada en libertad después de dos días detenida, firma María Vergara, secretaria ejecutiva. Carta de la Fundación Salvador Allende España, de noviembre de 2006, dirigido a MARÍA DONOSO, en que le informa que la Fundación está distribuyendo entre 20.072 beneficiarios residentes en Chile el Fondo de ayuda a las víctimas de Pinochet, por US \$7.500.557. Una carta



Foja: 1

de 29 de marzo de 1985, con logo de la ONU, en que le informa que se ha demorado la autorización para regreso de chilenos que piden repatriación voluntaria, firmado por la consejera Sharon Rusu.

3.- Documento con título "Nómina de presos políticos y torturados", en el que doña María Cristina Donoso Contreras figura bajo el número 2.623, con indicación de su rut.

4.- Artículo titulado "Algunos Factores de Daño a la Salud Mental", elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad. Se acompañó junto con un oficio de la Fundación de documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad dirigido al juez del 28° Juzgado Civil de Santiago en causa rol C-22561-2018, el que dice que no tiene los documentos solicitados, sin perjuicio de lo cual acompaña documentos de trabajo interno elaborados por el Comité de cooperación para la paz en Chile y la Vicaría de la Solidaridad.

5.- Artículo titulado "Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico" del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

6.- Artículo titulado "Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico" del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

7.- Artículo titulado "Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos" del mes de Abril del año 1987, elaborado por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

8.- Artículo titulado "Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos" del mes de junio del año 1989, elaborado por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.



Foja: 1

9.- Informe psicológico de daño de doña María Cristina Donoso Contreras realizado por el psicólogo Jorge Riquelme Marín, del PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Central de la Región Metropolitana, de fecha 03 de Agosto de 2021. Indica que conforme Protocolo de Estambul, el daño y el dolor se mantienen hasta la fecha, nunca ha podido superar el problema psicológico, manejo de emociones alterado en íntima relación con la evocación de la detención, tortura y vejaciones extremas. Concluye traumatización extrema por tortura y vejaciones sexuales, tiene diagnósticos de: trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo recurrente de larga data, trastorno del sueño permanente con terror nocturno, trastorno de ansiedad generalizado. Existe daño síquico, social y moral imposible de reparar.

Séptimo. Que, la parte demandada acompañó prueba documental, consistente en el oficio ordinario 4792/3671 del Instituto de Previsión Social de fecha 5 de octubre del año 2021, en el que se informa los beneficios económicos percibidos por la demandante de autos en virtud de la las leyes de reparación, avaluado a diciembre del 2019 en \$22.150.920.-

Octavo. Que, atendido el mérito de los antecedentes que constan en autos, esto es lo expresado por ambas partes en la etapa de discusión y la prueba rendida, se tienen por acreditados lo siguientes hechos:

Que doña María Cristina Donoso Contreras fue detenida en tres oportunidades, entre el 19 y el 25 de diciembre de 1973 en el Regimiento de infantería San Bernardo; entre el 1 y el 20 de enero de 1974 en el recinto de la medialuna de Maipú; y entre el 24 de enero de 1974 y el 26 de enero de 1974 en un recinto de la Policía de Investigaciones en la Región Metropolitana, donde fue víctima de torturas consistentes en golpes, insultos y abusos sexuales, y en una fecha no determinada de fines del año 1974, salió de Chile hacia Mendoza, Argentina, en calidad de refugiada.

Queda asentado, además, que la actora se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, establecida por Decreto Supremo N° 1.040, del año 2003, del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I.



«RIT»

Foja: 1

I.- En cuanto a la excepción de reparación integral interpuesta por el Fisco.

Noveno. Que, las disposiciones legales invocadas por el Fisco, entre ellas las Leyes N° 19.123 ,19.992 y 20.874 como fundamento de su alegación en cuanto a que los perjuicios reclamados ya han sido reparados, denominadas también “Leyes de Reparación”, si bien corresponden a un reconocimiento del Estado de su deber de reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y a sus familiares directos, en ningún sentido las reparaciones materiales y simbólicas en ellas contenidas, a juicio de esta sentenciadora, resultan incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios, de considerarse que concurren los requisitos para ello.

A mayor abundamiento que de acuerdo al artículo 17 de la Ley N° 19.123, se establece una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o de la violencia política, que no contempla la limitación pretendida por la demandada, debiendo tenerse presente, a mayor abundamiento, que la propia ley, también conocida como Ley de Reparación, ha ido ampliando no sólo los beneficios otorgados sino también la calidad de beneficiarios a lo largo del tiempo.

En el mismo sentido, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta magistratura- con una reparación meramente simbólica.

Además, la indicada normativa y cuerpos legales en general citados tampoco establecen renuncia, prohibición o incompatibilidad alguna con una eventual reparación monetaria que tenga por objeto la reparación



«RIT»

Foja: 1

integral del daño padecido, razones todas ellas que en consecuencia llevan a esta magistratura a rechazar la alegada excepción de reparación.

En cuanto a la excepción de prescripción opuesta por el Fisco.

Décimo. Que, de forma previa a entrar al fondo del asunto que ha sido sometido a conocimiento de esta magistratura, cabe pronunciarse sobre la excepción de prescripción interpuesta por el Fisco.

Décimo primero. Que, en este sentido cabe reiterar que la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad.

Décimo segundo. Que, al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso significaría una negación de Derechos Fundamentales, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que: *“en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados,...si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta*



«RIT»

Foja: 1

coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna” (Rol CS 3573-2012).

Todas estas reflexiones conducen en consecuencia al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada.

III. En cuanto a la pretensión indemnizatoria.

Décimo tercero. Que, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada y que conducen a establecer la responsabilidad del Estado en las detenciones, privaciones de libertad, torturas y actos violentos practicados a doña María Cristina Donoso Contreras al margen de todo proceso legal, por agentes del Estado, considerando la normativa aplicable.

Así, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún órgano del Estado puede desconocerlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949.

Décimo cuarto. Que, establecida de forma manifiesta la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor; así el daño moral tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad



«RIT»

Foja: 1

física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

Décimo quinto. Que, en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral reclamado, la demandante presentó informe psicológico de daño realizado por el PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Central de la Región Metropolitana, de fecha 03 de agosto de 2021, donde consta que producto de los hechos expuestos en su demanda la actora sufre trastorno de estrés pos traumático, trastorno depresivo recurrente y de larga data, trastorno del sueño permanente con terror nocturno y trastorno de ansiedad generalizado.

Ahora bien, no obstante la prueba rendida y analizada precedentemente que resulta satisfactoria para acreditar el daño moral alegado, la existencia de dicho daño moral en este caso incluso pudo presumirse atendida la gravedad del hecho ilícito, sus consecuencias y las circunstancias que lo rodearon.

Décimo sexto. Que, en la determinación del quantum de la indemnización, cabe señalar que en la especie se configura el daño moral padecido por la demandante por los motivos expresados en el considerando anterior, razón por la que pese a lo complejo de calcular y cuantificar este tipo de daño, esta Juez lo regula prudencialmente en la cantidad de \$ 50.000.000

(Cincuenta millones de pesos).

Décimo séptimo. Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que la misma quede ejecutoriada.

Décimo octavo. Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistratura que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47 y siguientes, 222 , 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518



«RIT»

Foja: 1

del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve que:

I.- Se rechazan las excepciones de reparación y de prescripción deducidas por el demandado.

II.- Se acoge, parcialmente, la demanda deducida a lo principal del escrito de fecha 13 de julio de 2021 y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma total de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a favor de doña María Cristina Donoso Contreras.

III.- Que se exime del pago de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° C-5960-2021.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintidós de Diciembre de dos mil veintiuno.**

